

Политика • Política

El nuevo sistema político mexicano: reconfiguración de capacidades y poder

Gustavo L. Montiel

→ Resumen

Existen diversos elementos que construyen la idea del sistema político como tal, en el contexto de lo mexicano, pero que además se diferencian de características del pasado, por lo que podemos ubicar entonces el planteamiento de un nuevo sistema con características que se van construyendo como parte de las tendencias que se generan a su interior y que le diferencian de lo que ocurría anteriormente. A partir de una caracterización del sistema político como metodología, se construirá un esquema de explicación que interpreta la forma en que la política mexicana ha cambiado a lo largo del siglo XXI. La destrucción de las instituciones del antiguo sistema político está asociada a un largo proceso de lucha política, que permitió la creación de nuevas instituciones, pero en espacios políticos muy específicos. El artículo rastrea los cambios en el sistema político de México en el siglo XXI en sus diversas esferas y manifestaciones: poderes públicos, sistema de partidos, complejo electoral, sociedad civil, procesos de democratización; se consideran las evoluciones de los tres poderes del gobierno y se analiza su correlación actual.

<https://doi.org/10.46272/2409-3416-2020-8-1-10-27>

Artículo de investigación

Gustavo López Montiel, Profesor, Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, Tecnológico de Monterrey (México)

E-mail: anlopez@tec.mx

Para citar: Montiel, Gustavo López. "El nuevo sistema político mexicano: reconfiguración de capacidades y poder" [The new Mexican political system: reconfiguration of capacities and power]. *Cuadernos Iberoamericanos* 8, no. 1 (2020): 10-27.

<https://doi.org/10.46272/2409-3416-2020-8-1-10-27>. [In Spanish]

El artículo fue recibido por los editores: 14.06.2020

Aceptado para publicación: 10.07.2020

→ Palabras claves

Sistema político mexicano, política comparada, democracia, populismo

Introducción

El siglo XXI contiene referentes distintos a aquellos que nos acostumbramos a ver durante la postrevolución de inicios del siglo XX y el régimen que se construyó como resultado de ella. Podemos ver un tránsito acelerado entre el proceso de caída del régimen anterior, hacia la configuración del esquema populista actual, pasando por un proceso de democratización que cumplió medianamente con los elementos y características que

la democracia electoral requiere, pero con importantes deficiencias en los espacios sociales y económicos que esa democracia atiende ¿Cuáles son los aspectos relevantes que identifican al nuevo sistema político mexicano?

Existen diversos elementos que construyen la idea del sistema político como tal, en el contexto de lo mexicano, pero que además se diferencian de características del pasado, por lo que podemos ubicar entonces el planteamiento de un nuevo sistema con características que se van construyendo como parte de las tendencias que se generan a su interior y que le diferencian de lo que ocurría anteriormente. Esto es relevante para poder comprender la lógica de la política mexicana contemporánea que, si bien, puede encontrar a algunos actores anteriores, definitivamente contiene procesos, instituciones, actores y productos distintos a los que se habían encontrado durante la mayor parte del siglo XX.

Es por ello que comenzamos con una caracterización del sistema político como tal, para avanzar hacia la construcción de los elementos que sirven como referentes para el sistema actual en México y ofrecer un conjunto de aspectos que deben tomarse en cuenta para el análisis en el contexto contemporáneo. Lo anterior, porque no podría construirse un análisis efectivo si no se identifican aquellos aspectos explicativos, que son la base de posibles nuevas interpretaciones sobre el particular.

El sistema político

El sistema político representa un modelo a partir del cual se busca comprender y explicar la forma en que la política funciona en cuanto a acción, espacio y tiempo, a partir de la interacción entre diversos actores, reglas, procesos, etcétera. Es un modelo que permite analizar la forma en que se articulan y agregan intereses, los mecanismos que permiten hacerlo, así como los resultados que se obtienen de dichas interacciones y que se convierten en decisiones políticas que afectan a los ciudadanos. En ese sentido, ubicaremos en una primera instancia, la base teórica sobre la cual construimos los supuestos que estaremos explicando, para identificar la novedad de este sistema y el cambio a lo largo del tiempo.

La influencia de la teoría de sistemas, o mejor dicho de las teorías de sistemas en el estudio de la política tuvo varias vertientes que dominaron distintas formas de interpretación política y que derivaron en la observación más minuciosa y consistente de los fenómenos. Antes de entrar al estudio de ellas, se puede ubicar la noción de sistema como una idea en el contexto del pensamiento social, más que como un descubrimiento científico reciente.

En este sentido, se identifican tres tipos del uso de la palabra sistema. Por un lado, se puede referir al sistema como una descripción de algo. Es decir, un sistema es un conjunto de elementos que se interrelacionan entre ellos y con el ambiente. Este uso es básicamente definitorio del objeto que se quiere estudiar, pero no va más allá, pues no cuenta con elementos teóricos que impliquen una discusión sobre su potencial de explicación para un fenómeno en particular.

En una segunda utilización, el sistema se refiere a las formas en que se construyen explicaciones sobre cómo este conjunto de elementos se estructura, se relacionan y se conectan con el ambiente. Sirve para plantear las diferencias al interior de los enfoques sistémicos dentro de la propia teoría de sistemas. Esto es relevante para el objeto de estudio, puesto que concebir el origen de las perspectivas sistémicas ayuda a entender las técnicas que se emplean para

la medición y explicación de su comportamiento. Finalmente, el tercer uso es el de la aplicación de una perspectiva específica sobre los sistemas que incluye conceptos analíticos, metodologías y enfoques sobre el concepto de sistema en el estudio de un fenómeno.

En el caso de la perspectiva clásica de Easton, Introducir la idea del sistema a la política, implica la posibilidad de diferenciar a la política de cualquier otra actividad social y examinarla como si fuera un contenedor rodeado, y por lo tanto diferente, por un ambiente en el cual opera y que crea resultados que son aplicables para todos los componentes del sistema.¹ Lo que mantiene al sistema funcionando son entradas en forma de demandas y apoyos que son convertidos en productos en términos de decisiones políticas de varios tipos, que tienen consecuencias para el ambiente y para el sistema mismo en que existe. Estas decisiones son consideradas como importantes, pero están determinadas por el flujo de entradas que mantienen activo al sistema y que caracterizan a la acción política.

Como se aprecia, un aspecto fundamental de la teoría de Easton reside en las entradas y no tanto en los procesos, que es donde se ubican dos elementos fundamentales: por un lado, la construcción de una teoría del apoyo político, que deriva en una teoría de la política; y por el otro el estudio de la cultura como el atributo que moldea dichas entradas a la caja negra. En este último sentido se presume que los ciudadanos actúan en un contexto en que un conjunto de valores y prácticas moldean las metas y objetivos generales, así como los procedimientos que los ciudadanos sienten que deben ser usados.²

Por otro lado, para Deutsch, el modelo de redes de información permite mucha más flexibilidad en el análisis político pues incluye mecanismos para ubicar los problemas de búsqueda y modificación de objetivos, porque ambos dependen del desempeño en el ambiente, información recibida desde el sistema e información sobre desempeños anteriores. La información puede ser transmitida, guardada, analizada y medida, pero independientemente de su forma y mecanismo de transmisión, esta no cambia. Lo que sí puede ocurrir es que la información se pierda, lo que generaría un efecto de eficiencia, o que el canal funcione efectivamente entre los componentes y en relación a otros canales, lo que produciría un efecto de complementariedad, conceptos que permiten la operacionalización de variables que pueden ser mensurables para evaluar el funcionamiento del sistema.³

Es este último concepto el que resulta relevante en el contexto del sistema, puesto que permite medir el grado de pertenencia de los elementos del sistema a partir de variables de cohesión, símbolos, hábitos, que les permitan transmitir, combinar, recordar, etcétera, la información que obtienen a partir de la interacción en el sistema. De esta manera, los cambios inducidos por mecanismos externos o internos reciben la misma atención, mientras que el grado de integración y cambio del sistema, depende de la eficiencia de los códigos y canales de comunicación.

El sistema político entonces se entiende por la interdependencia de sus componentes y por las transacciones entre ellos, que en el sentido de que pueden ser medidas en diversas formas, ya sea por la cantidad de información intercambiada entre componentes, la información entre el sistema y el ambiente, la intensidad de la información, su configuración, etcétera, presupone lógicas propias y comportamientos observables. Un elemento relevante en el planteamiento de Deutsch, tiene que ver con la introducción del conflicto al sistema, lo que hace posible definir niveles de sistemas para el ordenamiento de los intereses de los componentes que los integran y tener mayor movilidad, y que pueden derivar de la simetría o asimetría dada por las condiciones anteriormente mencionadas.

1 Easton 1965.

2 Easton 1975, 435.

3 Deutsch 1961.

Finalmente, el concepto de sistema de Almond,¹ hace referencia al de proceso político, con la diferencia de que el sistema incluye la totalidad de las unidades relevantes, la interdependencia entre las interacciones de las unidades, y una cierta estabilidad en la interacción de estas unidades, entendido esto último como un equilibrio cambiante. En este contexto, cada sistema político, como un modelo de acción, incluye una orientación hacia tipos de acción política, determinados por actitudes, valores políticos, ideologías, caracteres, etcétera, que en conjunto generan acciones políticas.

Los elementos del sistema son el conjunto de estructuras y actores que determinan los procesos que se siguen al interior, a partir de la entrada de insumos, y hasta la generación de productos políticos. Estos son: partidos políticos, grupos de poder, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, el gobierno y sus actores, sindicatos y otros actores políticos, que en el contexto de un escenario político determinado por instituciones (reglas formales e informales), entonces a partir de estos elementos es que desarrollaremos el análisis de lo nuevo en el sistema político mexicano.

Tendencias de cambio del nuevo sistema político mexicano

En todo caso, origen y tradición se amalgaman con innovación y modernidad, para dar forma a las instituciones del siglo XXI. Los procesos y las estructuras políticas en un país reflejan la evolución, la historia, la cultura, los valores, las religiones, los grupos étnicos, las expresiones e identidades, los actores, las relaciones con otras sociedades, etcétera, y son referentes para entender cómo se han moldeado las instituciones reconocidas y con las que se vive en la actualidad.

Las instituciones son reglas establecidas de manera formal o informal, que regulan la interacción de los actores en un espacio dado.² Las instituciones políticas son las reglas del juego político, regulan la forma en que los actores compiten, ganan y ejercen el poder público en la arena política. Establecen las áreas de actividad pública y la forma en que esta se desarrolla, generando resultados colectivos que benefician o perjudican a los actores y los ciudadanos. Las instituciones no surgen de la nada, todas tienen impreso un contenido histórico preciso, por el conjunto de procesos que han influido en su formación. El pasado hispano, monárquico, liberal, revolucionario, nacionalista y democrático (independientemente de lo que todo esto signifique), está reflejado en las instituciones contemporáneas y en el discurso que las legitima, en el caso de México.

Las instituciones políticas están organizadas de acuerdo a fórmulas que pueden producir diferentes grados de eficiencia en la distribución de los bienes públicos. El diseño del gobierno y la forma en que el poder se encuentra estructurado, determinan los resultados de las decisiones políticas, beneficiando mayormente a ciertos grupos de ciudadanos y perjudicando a otros, o viceversa.³ Es por ello que el diseño institucional que se ha configurado en los últimos años, es fundamental para comprender los alcances del cambio en este caso, pero además, ha generado equilibrios de poder que han generado espacios de dominio por parte no únicamente de organizaciones públicas, sino también de otros actores políticos.

El diseño del gobierno en México implica la existencia de una división del poder en tres figuras, el presidente, un congreso bicameral y un poder judicial colegiado y su integración y fundamento se indica en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los tres gobiernan. Sin embargo, a la par de la mayor parte de los países en América

1 Almond 1960.

2 Hall 2009.

3 Helmke and Levitsky 2006.

Latina, México adoptó una configuración de poderes donde el presidente tiene más poder informal que el resto,¹ aunque el congreso tiene más atribuciones formales. Al mismo tiempo, en términos espaciales, el poder se federalizó, permitiendo la incorporación de los estados a la toma de decisiones nacionales y respetando, al menos en la formalidad jurídica, sus propios ámbitos de acción. Eso marca los principales límites que los actores tienen en su lucha política pero, incluso en el contexto del esquema populista que ganó la elección de 2018, es el principal límite a la concentración de poder, aunque se haya ubicado en el contexto de una alianza en torno al presidente, misma que se fue modificando en el contexto de los distintos momentos políticos que, como parte del mismo esquema institucional, se dan en el contexto de sexenios.

El siglo XXI llegó para el sistema político mexicano, como una oleada de intensos y profundos cambios, donde la dinámica de las instituciones se ha transformado aceleradamente y ya no se puede decir con la misma certeza de que se tiene un presidente particularmente fuerte, un congreso subordinado o un federalismo aparente, como ocurrió en el siglo XX. Lo que ocurre en el México de inicios del siglo XXI, es diferente a lo que pasaba en los ochenta y noventa del siglo XX. Muchos de quienes leen estos párrafos no identificarían al México de la época en que nacieron, con el que pueden observar cotidianamente en las noticias.

Las instituciones políticas mexicanas del siglo XX

El origen de las instituciones políticas del siglo XX se ubica en la construcción pausada del México independiente, pero en particular en el prolongado gobierno de Porfirio Díaz (1876-1880 y 1884-1911). Este se fundó en una combinación aparentemente extraña (pero común en los gobiernos Latinoamericanos de la época y posteriores) que se expresó en un gobierno liberal con raíz autoritaria. Esta contradicción de origen motivó uno de los movimientos sociales más amplios de inicios del siglo XX que, exigió dar contenido social a la estructura y objetivos gubernamentales. Pero también fue fundamento del acelerado desarrollo que tuvo el país en términos de su infraestructura y capacidades económicas a finales del siglo XIX; lo que no necesariamente trajo beneficios para todos.

Así, la revolución y sus instituciones (es decir, la práctica institucionalizada de la violencia civil y militar como mecanismos rectores de la política) generaron un esquema donde la ingobernabilidad, más que la inestabilidad, garantizaba la caída de los gobiernos, pero más aún, el fortalecimiento del nuevo ejército y los caudillos en las regiones. En un complicado proceso de simbiosis, en diversos lugares del país el viejo ejército y élites, pudieron integrarse a los procesos de refundación de las estructuras políticas después de la revolución.

Con el afán de generar mayores elementos de control y capacidad de ejercer el poder, Plutarco Elías Calles tuvo la habilidad de construir un pacto político que agrupó a la mayor parte de las fuerzas políticas del país en un partido, que en su inicio en 1929 se llamó Partido Nacional Revolucionario (PNR). Este pacto le permitió a Calles lograr el objetivo de controlar el poder parcialmente, pero no de retenerlo para él.

Sin embargo, la estructura política creada por Calles le permitió reconstruir los vínculos con grupos regionales en un espacio de poder político que fue funcional para establecer vías de control regional, en una primera instancia, para restablecer las estructuras de decisión nacional. Si bien se habían construido las bases de un Estado nacional durante el siglo XIX, en el XX era necesario construir el gobierno que le diera viabilidad a esa estructura.

Cárdenas integró la estructura del estado mexicano moderno, a partir de la construcción de las líneas corporativas que lo caracterizaron. El PNR se transformó en Partido de la Revolución Mexicana (PRM) en 1938, e integró también a grupos con intereses económicos y sociales. Sin embargo, esto tuvo el objeto de generar un contrapeso a las alianzas que Calles había construido, y hecho posible, a través del PNR y el gobierno.

El cambio de PNR a PRM significó el tránsito de una estructura de alianzas de distintos intereses regionales y nacionales, a una configuración mucho más compleja que interconectó dicha estructura con una política más amplia de gobierno y una filosofía de políticas públicas que permitió al presidente asegurar mecanismos de control en el contexto de un Estado moderno, pero no necesariamente democrático.

El espacio corporativo construido con el nuevo partido, incluyó, excluyó y construyó actores políticos que fueron determinantes para el establecimiento de una estructura coherente de poder público. Lo anterior también tuvo como base un discurso que había evolucionado del positivismo del siglo XIX al modernismo, pasando por un nacionalismo indigenista y, hasta cierto sentido, popular a inicios de siglo.

Esta estructura caracterizó la época de dominio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sobre las elecciones y las decisiones públicas y se mantuvo prácticamente sin cambios durante el último cuarto del siglo XX. Este acuerdo distinguió al sistema político mexicano como uno de los más estables de la región y dio las bases de la política en el despunte del siglo XXI.

A pesar de su fuerza y control, el gobierno mexicano no fue un actor monolítico. Diversos acontecimientos lo demuestran, como las protestas de ferrocarrileros, médicos, electricistas, estudiantes, sindicatos y organizaciones civiles, entre otros. Hubo episodios muy lamentables de represión, que se daban cuando el PRI y el sistema corporativo se mostraban incapaces de dar salida a las demandas de los grupos de interés y organizaciones. El más recordado, pero no el único ni el más violento, tuvo que ver con la matanza en de estudiantes en Tlatelolco en 1968.

Las instituciones políticas mexicanas del siglo XXI

El punto de inicio de la creación de esta nueva época varía, pues aunque se enfatizó fundamentalmente después de los hechos de Tlatelolco; también se ha dicho que inició con las elecciones presidenciales de 1988, como el punto que encaminó la dinámica del cambio por la vía de una lucha político-electoral; para otros, este momento se dio con la crisis política de 1976 y la reforma electoral del año siguiente; sin embargo, tampoco pueden desdarsearse los impactos de las crisis económicas recurrentes registradas, cada vez con mayor gravedad, en 1976, 1982, 1987 y en 1994-1995.¹

En realidad, el agotamiento del modelo instrumentado durante el siglo XX se expresó de diversas maneras desde los ochenta. Particularmente en la forma de crisis económica y diversas crisis políticas en distintos espacios estatales. Crisis que, en su conjunto, alteraron profundamente el perfil de la sociedad mexicana, sus condiciones de vida, sus aspiraciones, sus conductos y valores en todos los ámbitos, incluyendo, de manera muy señalada, el de la esfera pública.

La reforma política impulsada por el gobierno de José López Portillo en 1977, donde se liberaban las restricciones que impedían de participar en la vida electoral a diversos partidos políticos y desconocían a organizaciones políticas antagónicas al gobierno, resultó imprescindible para el proceso de reformas.² Del mismo modo, diversos ajustes

1 Villegas et al. 2018; Woldenberg 2012.

2 Sirvent Guitérrez 1997.

estructurales de la economía mexicana consolidaron dicho proceso. Estos ajustes iniciaron desde 1982 con el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), se reforzaron durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), y se consolidaron durante el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000).

Estas reformas también trajeron mayor pobreza y marginación en diversas zonas del país, estancamiento y atraso en sectores productivos que no pudieron ponerse al día, y etapas de mayor autoritarismo que el de épocas anteriores, que incluyó represión policiaca y militar en diversas regiones del país, incluyendo el conflicto de Chiapas, originado en 1994. Los procesos de ajuste económico implicaron un mayor control de las instituciones políticas en ciertos momentos críticos, como las elecciones de 1988 y 1994, con el objeto de asegurar los efectos de dichas políticas de ajuste. En ocasiones dicho control derivó en procesos de liberalización, como las reformas electorales de 1990-1991, 1994 y 1996.

La derrota electoral del PRI en el año 2000 y la llegada de Vicente Fox a la presidencia, dio un respiro a la tensa relación entre las estructuras de poder político y la ciudadanía, en lo que se pensó sería una transformación en las formas en que el poder se ejercía desde la presidencia. Sin embargo, surgió un fenómeno nuevo donde las estructuras corporativas no únicamente no desaparecieron, sino que se transformaron para adaptarse a un nuevo contexto de interacción política.

El neocorporativismo

El neocorporativismo es un sistema donde confluyen organizaciones corporativas, como los obreros, campesinos y clases medias, y grupos específicos de interés en la elaboración de políticas públicas. Es decir, no únicamente intervienen las grandes corporaciones, sino también grupos pequeños con intereses específicos¹ que se hacen relevantes dependiendo de las capacidades de veto que tienen con respecto a los demás grupos de poder.

La estructura corporativa mexicana, en que se organiza la política, ha derivado en una combinación del viejo corporativismo con la influencia de una lógica fuertemente pluralista, dando lugar a lo que se ha llamado neocorporativismo. Esta forma de organización política se ha clasificado a partir de las reformas políticas, económicas y sociales de los 1980's en Europa del Este y América Latina, donde las estructuras corporativas dan paso a una mayor influencia de los grupos de interés, cuya lógica es fundamentalmente pluralista.

La organización de la política en México avanzó hacia un sistema más pluralista, sin dejar de ser corporativo, donde cada vez más grupos de interés tienen mayor influencia en el proceso de toma de decisiones, aunque no necesariamente en las decisiones finales. Por ejemplo, organizaciones no gubernamentales, fundaciones privadas, agrupaciones de ciudadanos con fines específicos, etcétera, participan de manera más activa en los procesos de elaboración de políticas públicas. Este pluralismo más o menos limitado por la propia estructura política, ha sido un elemento de vital importancia en la vida política mexicana.

Si bien la estructura corporativa no ha sido abandonada – y seguramente no se abandonará debido a las ventajas que representa para la organización del poder político en el país, – ahora convive con esta forma de pluralismo, modificando el proceso de toma de decisiones, incorporando más actores, pero sin una estructura legal y política orientada a sostener las nuevas relaciones de poder.

Los poderes públicos

El presidente representa al poder ejecutivo, siendo al mismo tiempo Jefe de Estado y Jefe de Gobierno. El poder ejecutivo encabeza la administración pública federal y controla dos tipos de entidades públicas, por un lado, las secretarías de estado y todas las dependencias que a ellas se ligan, que al mismo tiempo integran el gabinete *legal* del presidente. Las secretarías de estado se organizan por sectores o áreas de acción, y su función es facilitar el trabajo del presidente, en la ejecución de programas de gobierno. Las y los secretarios de estado son colaboradores del ejecutivo y pueden ser removidos y designados libremente por el presidente, con excepción del Fiscal General de la República, quien es designado por el Congreso. Por otro lado, están las agencias paraestatales o dependencias del gabinete *ampliado*, que han surgido principalmente como entidades estratégicas del estado, o bien, como producto de las acciones de nacionalización o estatificación de actividades productivas.

Las entidades públicas que dependen del presidente sugieren aspectos interesantes de la política mexicana, y reflejan los intereses que los diversos presidentes han tenido sobre problemas específicos que han enfrentado en su tiempo. El nombre de dichas dependencias se ha modificado, su número se ha incrementado, o bien, han desaparecido, de acuerdo a los temas considerados como prioritarios, en razón de la crisis que, en cada caso, se pretendió enfrentar con estas medidas.

Aparte de ser la estructura a través de la cual se ejecutan las decisiones relevantes en México, el gabinete presidencial tiene la particularidad de contener los espacios para pagar las alianzas que el presidente hace para obtener apoyos en su ascenso, ya sea durante la época de dominio del PRI, como también después de ella. Esto reduce la capacidad de acción del propio presidente, y en la mayor parte de los casos la eficiencia y eficacia de las propias dependencias.

La mayor parte de las decisiones relevantes que se toman en México, pasa por las oficinas presidenciales. A pesar de que el Congreso cumple un papel importante en el proceso de toma de decisiones, la mayor parte de las iniciativas de ley parten del poder ejecutivo. A diferencia de otros países, el proceso de *lobbying* o negociación de políticas entre el presidente, el congreso y los líderes de organizaciones corporativas o grupos de interés, es opaco y generalmente privado.

En el Congreso de la Unión recae la función legislativa en México. Tiene dos cámaras, la primera es la de Diputados, que en esencia representa a los ciudadanos y se integra por 500 diputados que duran en funciones tres años, y que al finalizar se renuevan en su totalidad. Los diputados son electos bajo dos principios: el de mayoría relativa, donde se elige un diputado por voto directo de los ciudadanos en cada uno de los 300 distritos electorales distribuidos a lo largo del país. El de representación proporcional, donde 200 diputados se eligen en cinco circunscripciones o zonas electorales en que se ha dividido al país, 40 en cada una, de acuerdo al número de votos que cada partido obtiene en cada circunscripción. Los partidos que hayan obtenido por lo menos el tres por ciento de los votos nacionales, pueden obtener diputados bajo este principio. Este esquema resultó fundamental para el proceso de transición política, pues dio mecanismos de inclusión que, si bien ahora han perdido sentido, siguen explicando la lógica del comportamiento congresional.¹

La cámara de Senadores representa a los estados, y se integra por 128 senadores que permanecen en su cargo durante seis años. Estos se eligen bajo tres supuestos. El primero es el de mayoría relativa, donde dos senadores se asignan a los partidos que obtuvieron

la mayor votación en cada estado de la República, incluyendo al Distrito Federal. Con ello se obtienen los primeros 64 senadores. El segundo es el de la primera minoría, donde se asigna un senador a cada partido que haya obtenido el segundo lugar en la votación estatal para senadores. Con ello se designan a los siguientes 32 senadores. El tercer principio es el de representación proporcional, donde los restantes 32 senadores se reparten de acuerdo a la proporción de votación que cada partido obtuvo en la elección para senadores a nivel nacional.

Desde 1934 y hasta 1997, el PRI mantuvo la mayoría en ambas cámaras. En 1988 se designaron a los cuatro primeros senadores no priistas en la historia moderna del país, y en 1997 el PRI perdió la mayoría en la cámara de Diputados, aunque fue la primera mayoría en todas las legislaturas subsecuentes, hasta el triunfo de Morena en 2018. La reelección legislativa se incorporó para periodos consecutivos a finales de la segunda década del siglo XXI, modificando las estructuras de disciplina partidaria.

El poder legislativo tuvo un papel limitado durante la era de gobiernos priistas. La actuación de las y los legisladores del PRI estaba ligada, como la del resto de los políticos, a los designios del presidente, a él debían no únicamente lealtad, sino también su puesto. Por ello, el congreso funcionó de manera limitada, aprobando las iniciativas del presidente con escasa crítica y discusión. A pesar de la presencia de diputados de oposición desde los cuarenta, el congreso nunca tuvo un papel relevante sino hasta mediados de los ochenta, cuando la oposición comenzó a tener mayor influencia en las decisiones.

Durante los periodos de gobierno sin mayoría legislativa, el congreso hace uso de sus facultades al negar incluso la salida del presidente al exterior, o la negativa a aprobar iniciativas presidenciales, o a discutir temas propuestos por el presidente. Mientras que cuando hay mayoría del presidente y su partido el congreso tiende a plegarse a los deseos del ejecutivo pero, a diferencia del siglo XX; con un costo político alto por el presidente.

Los partidos que interactúan en su interior, buscan alianzas y negocian con sectores y organizaciones para aprobar o detener decisiones que consideran benéficas o no de acuerdo a sus posiciones políticas. A pesar de que las posiciones de diputados o senadores eran utilizadas para pagar favores políticos, por lo que el perfil de los legisladores era de bajo nivel, el fortalecimiento del congreso y su utilidad para servir como contrapeso del presidente y el poder judicial están actualmente de por medio.

El poder judicial está conformado por diversos órganos y actores a lo largo de distintos niveles de decisión. Los dos órganos principales son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por diez ministros y un presidente, y el Consejo de la Judicatura Federal. A pesar de su limitado papel durante casi todo el siglo XX, el poder judicial ahora es el otro pilar de la política mexicana. Los jueces también son actores políticos, puesto que sus decisiones no únicamente tienen un contenido político, sino que influyen en el proceso de toma de decisiones.

El poder judicial puede obligar indirectamente a los ciudadanos a través de procesos judiciales como la jurisprudencia, donde cinco decisiones en el mismo sentido sobre casos similares, se constituyen como disposición a acatar por los tribunales y jueces en sus decisiones, y por lo tanto por los ciudadanos. De la misma forma, a través del juicio de amparo, que es una forma limitada de una capacidad que tienen otros poderes judiciales en el mundo y que se llama revisión judicial, pueden declarar a algunas leyes inconstitucionales o de aplicación limitada, pero únicamente para los promotores de los juicios.¹

La capacidad de revisar leyes a petición de los poderes, o la recurrencia a la Suprema Corte para resolver controversias entre poderes, o entre la federación y los estados y municipios, ha incrementado la influencia de los jueces en la vida política del país. El matrimonio de personas del mismo sexo o la posibilidad de usar mariguana, entre otras decisiones, son ahora posibles en México gracias a la intervención del judicial y la creación de jurisprudencia.

Es importante recordar que estas capacidades del poder judicial lo han ubicado como un árbitro con cierta legitimidad en las disputas que surgen cotidianamente entre los partidos, y los poderes y niveles de gobierno en que interactúan. Esto puede tener un límite y es que el abuso de esas capacidades puede generar una crisis de legitimidad y autoridad en el largo plazo. Un aspecto que incide en la gobernabilidad de este poder es la corrupción que se practica en los niveles intermedios y bajos de acción. Desde los tribunales de circuito hasta los jueces en los niveles más bajos son sujetos de mayor escrutinio por prácticas deshonestas en la administración de la justicia. Esto influye de manera determinante en el papel del poder judicial y limita su influencia en la toma de decisiones.

El sistema de partidos

El sistema de partidos es un conjunto de interacciones entre partidos políticos. Contiene dos dimensiones, la electoral y la de gobierno, así como espacios intermedios como los mismos partidos políticos. Partimos de una perspectiva teórica que permite ubicar espacialmente los lugares del problema. Los sistemas de partidos se dividen en dos grandes dimensiones que a su vez comprenden subsistemas donde los partidos interactúan con distintos objetivos y marcos institucionales.

Existen diversas definiciones sobre el partido político como unidad de análisis, dependiendo de qué se busca explicar. A pesar de que las más recientes, y las que se utilizarán en este apartado, los conciben como entidades o grupos de ciudadanos que buscan el poder a través de las elecciones,¹ no siempre los partidos políticos han sido partidos electorales. Por ejemplo, Gramsci ubicó al partido como actor fundamental del esquema de transformación marxista al partido político, pero no como un partido electoral, sino como un ente unificador y organizador de la ciudadanía en torno a un proyecto de largo plazo. Duverger² planteó una clasificación con base en la organización de cuadros o de masas, Kirchheimer³ como partidos *catch-all*, Katz y Mair,⁴ como partidos cártel, Panebianco⁵ como organizaciones que evolucionan en distintas formas dependiendo de sus fines, etcétera.

Más allá de su estructuración interna, los partidos construyen interacciones que definen al sistema de partidos en términos del número de partidos que realmente influyen en decisiones políticas, por las relaciones que se establecen entre ellos, así como por los espacios ideológicos que les definen en términos de sus preferencias políticas. En términos de su número puede haber sistemas de partido único, sistemas bipartidistas y pluripartidistas. Diversos autores han construido fórmulas para definir el número a partir del cual los sistemas pluripartidistas pueden ser clasificados por el tamaño, influencia y capacidad de decisión de los partidos que interactúan en el gobierno.

Esta dimensión regula las interacciones de los partidos y los votantes en el ámbito electoral y da los lineamientos para que dicho apoyo se concrete en lugares dentro de

1 Sartori 1987.

2 Duverger 1980.

3 Kirchheimer 1990.

4 Katz and Mair 1995.

5 Panebianco 1998.

los órganos de gobierno, ya sea un sistema parlamentario o presidencial. Por otro lado, la interacción en el gobierno se da en varios espacios de poder. En un sistema donde el poder está dividido, como en México, los partidos interactúan fundamentalmente en el ámbito legislativo. Sin embargo, el presidente también es integrante de un partido, y aunque en el discurso político se niegue, las críticas y apoyos de los partidos a las decisiones presidenciales también implican interacciones partidarias.

En el legislativo, los partidos tienen un intercambio de posiciones que después determina los principales lineamientos de acción gubernamental, ubica agendas, discute en torno a los temas de dichas agendas y establece reglas formales para el sistema. Todo esto está regulado por instituciones que para el caso de México son aun limitadas, pero fundamentalmente por un conjunto de incentivos e intereses que determinan en casi todos los momentos las decisiones sobre los temas ubicados en la agenda.

Diversos grupos interactúan en este espacio tratando de influir en las decisiones que se toman. Pero no es el único espacio de interacción, pues en las legislaturas locales, los cabildos, las negociaciones con espacios del poder ejecutivo, etcétera, son también lugares donde los partidos actúan y contribuyen en el proceso de toma de decisiones. En ellos se presentan cotidianamente posiciones partidarias, interactúan intereses que se generan sobre temas de las agendas o de temas que se busca entren a las agendas, etcétera. Estos espacios concentran buena parte de la actividad política diaria.

En los sistemas presidenciales el poder ejecutivo, que también emana de la primera dimensión, es igualmente un actor que trata de incidir en las decisiones de los otros poderes, aunque aún de manera informal. Los otros poderes con sus espacios de decisión también buscan influir en las decisiones y acciones del ejecutivo. Posteriormente, recibe las decisiones del legislativo y las implementa, administra los recursos públicos, propone modificaciones, etcétera, pero lo hace también bajo presión constante de sus oposiciones partidarias, grupos de interés, movimientos sociales, demandas aisladas, etcétera, así como de sus mismos aliados, a quienes tiene que atender para mantener la unidad en torno a las acciones políticas o las alianzas con fines de apoyo político en otros ámbitos de la negociación.

Sistema electoral

El sistema electoral mexicano desde la segunda mitad del siglo XX, ha estado basado en el voto libre, directo, secreto, universal, personal e intransferible. Las condiciones para que estas características se cumplan han sido diversas. Por ejemplo, el voto universal se fue instaurando a lo largo de la década de los cincuenta cuando se otorgó el voto a la mujer, primero en elecciones municipales, estatales, y después federales.

El sistema electoral también ha estado basado en la existencia de distritos electorales de distintos tipos. Actualmente, cuenta con distritos uninominales y plurinominales. Los 300 distritos con elección de mayoría relativa para diputados son uninominales. Los 5 distritos con elección de representación proporcional, también llamados circunscripciones, eligen a 40 diputados cada uno. En la elección presidencial se tienen 300 distritos que suman sus resultados a un distrito nacional que es el país. En la elección de senadores, se tienen 32 distritos donde se eligen a 3 senadores. Es decir, cada estado es un distrito donde se eligen a tres personas para el mismo cargo. Pero también hay un distrito nacional para la elección de 32 senadores.

Las fórmulas en las que se basa el sistema electoral son la de mayoría relativa y dos de representación proporcional. En la primera, quien gana más votos en un distrito de mayoría, gana el cargo o cargos que se disputan en dichos distritos. En la segunda, se utilizan dos fórmulas para el reparto de diputados y senadores bajo el principio de representación proporcional. En la primera fórmula de reparto se asignan los lugares bajo el criterio de la obtención de un cociente sobre el que se reparten los espacios en las listas partidarias. La segunda es la del resto mayor, donde los lugares que no se asignan con la primera fórmula se reparten a partir del ordenamiento de los restos mayores que obtienen los partidos después del primer reparto y se asignan los lugares del más grande al más pequeño.

La combinación de 300 diputados de mayoría y 200 de representación proporcional, genera mecanismos de representación que se desligan de un espacio territorial en el que pueden interactuar representantes con ciudadanos y que lleva, en consecuencia, a que la lealtad de los representantes se ubique en las dirigencias estatales y partidarias y no en la de los electores. Lo mismo pasa con los senadores de la República.

De la misma forma, este sistema electoral es el resultado de distintas modificaciones a lo largo de más de veinte años de cambios intensos y constantes. De un sistema de mayoría que basaba el número de diputados y distritos en el número de ciudadanos y el equilibrio en la representación, se ha pasado a un sistema híbrido cuyos resultados han llevado a una intensa fragmentación y polarización del sistema, con un sentimiento de estancamiento.

La ciudadanía

Ciudadanos efectivos no es la única condición para avanzar en la transición política de México, pues puede haber gobiernos democráticamente electos, lo que implicó el ejercicio de la ciudadanía, pero no tener necesariamente gobiernos democráticos. Esta última condición puede referirse a la falta de mecanismos institucionales democráticos que permitan a los gobiernos ser también democráticos.

Esto implica la base del ejercicio mismo de la ciudadanía, puesto que esta no se agota en el voto o en alguna otra actividad formal de participación política, sino que va más allá y se realiza en la cotidianeidad misma. ¿Cuántas decisiones toman las estructuras de gobierno día con día? ¿En cuántas de ellas participan los ciudadanos en México? De nada sirve elegir a un gobierno de manera limpia y democrática si este no encuentra mecanismos que le permitan tomar decisiones, o no logra que las decisiones tengan un vínculo con la ciudadanía, y que mantengan entonces una fuente de legitimidad.

En México, las instituciones políticas democráticas se han venido construyendo de diversas maneras y por coyunturas específicas. Parece entonces evidente que la duración de las democracias depende de la forma en que se construyen sus arreglos institucionales. En este sentido se pueden identificar dos niveles en que estos arreglos funcionan. Por un lado, lo que se llamaría el nivel macro, donde se identifican las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo en el caso de los países presidenciales, las relaciones de independencia de los bancos centrales, los sistemas electorales, etcétera, que son condiciones básicas para la existencia de la democracia.¹

Por el otro, lo que se refiere a la microfísica de las relaciones políticas que es donde se ejerce de manera efectiva la ciudadanía. Por ejemplo, cómo podemos influir en una decisión gubernamental por mínima que sea. ¿Existen los mecanismos en México para

que los ciudadanos se hagan escuchar y que los funcionarios tomen en cuenta las opiniones? La participación política de un ciudadano no se reduce únicamente al voto, pero tampoco existen mecanismos que vinculen a la ciudadanía con las decisiones cotidianas.

La consulta popular, el referéndum y el plebiscito, las consultas vecinales, las audiencias públicas, y otras formas de participación política que diversas constituciones y leyes estatales contemplan, no satisfacen el requisito de la ciudadanía efectiva, porque la aplicación de las mismas pasa por la aprobación de la autoridad cualquiera que ésta sea. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de México existen diversos mecanismos de participación ciudadana como el plebiscito y el referéndum que pueden ser solicitados por los propios ciudadanos, pero al final del proceso ambos mecanismos deben ser avalados por diversas autoridades para su realización. El plebiscito es autorizado por el Jefe de Gobierno y el referéndum por el congreso local, aun cuando hayan sido solicitadas por los ciudadanos. Más aún, los parámetros que la ley establece en que las decisiones tomadas a partir de estos mecanismos de participación se vuelven vinculantes para la autoridad son demasiado altos. En otras entidades donde también hay mecanismos de participación ciudadana, no se ejercen por falta de reglamentación o por imposibilidad de hacerlo ante los límites de la propia ley.

Esto lleva a dos vertientes de discusión. Por un lado, la que se refiere a qué mecanismos institucionales de participación política en el nivel más bajo deben construirse, para asegurar que las decisiones gubernamentales en todos los niveles estén vinculadas con la ciudadanía. Por el otro, la construcción de instituciones que favorezcan el desempeño de los gobiernos y, por lo tanto, incrementen la calidad de la democracia. En el primer caso, pueden tomarse experiencias de participación local que a lo largo del país se dan de manera informal. No es necesario ni recomendable homogeneizarlas, pero sí es deseable formalizarlas y ligarlas con disposiciones que sancionen a los funcionarios para que respeten estas formas de participación, y que sean parte del proceso de elaboración de políticas y toma de decisiones. En buena medida, los arreglos institucionales de la democracia afectan su desempeño, por lo que debe haber un balance entre el aseguramiento del ejercicio de la ciudadanía y la agilización de los procedimientos en la toma de decisiones y su ejecución.

Populismo y desdemocratización

En los años recientes, hemos visto un preocupante proceso de dismantelamiento de algunas instituciones democráticas en México, que ha sido analizado desde diversas perspectivas, pero que hoy toma una mayor intensidad, debido a una decidida confrontación desde diversos espacios de decisión pública, particularmente limitando la libertad de expresión y dañando severamente las capacidades para la protección de derechos humanos.

La desdemocratización planteada por Charles Tilly¹ como un mecanismo de erosión de la democracia, en conjunto con sus estructuras, funciones, libertades, reglas, legitimidad, etc., puede ser observada en México, prácticamente desde el momento mismo del cambio de un partido en el gobierno a otro, en el año 2000. La decisión del entonces presidente Fox de no realizar acciones profundas que marcaran una diferencia con los sexenios priístas anteriores, inició un proceso de fortalecimiento de los grupos que buscaban revertir las condiciones de transición política.

En los sexenios subsecuentes, a pesar de que se habían firmado acuerdos para la construcción de organizaciones y reglas democráticas, se simuló su instrumentación, como en el caso del servicio civil de carrera cuyo objetivo era evitar que las administraciones

consideraran los cargos públicos como un botín político y se iniciara así un proceso de profesionalización de la administración pública. Sin embargo, se construyeron estructuras administrativas alternas, con dobles espacios de autoridad que terminaron por hacer del servicio un sistema accesorio a las estructuras reales de poder.

En el caso de otros mecanismos multilaterales que comprometían al país a instrumentar estrategias de gobierno abierto, asumiendo al gobierno como los tres poderes, como un medio para fortalecer las estructuras democráticas y fomentar la participación colectiva no electoral, los avances fueron en forma, pero no de fondo, pues el entramado burocrático que se ha generado para darles sentido, ha hecho mucho más tortuoso el ejercicio de derechos.

Por ejemplo, el Sistema Nacional Anticorrupción, parte del supuesto de que la corrupción es una práctica generalizada y permanente, que debe ser combatida a través de la cooperación de todas las estructuras administrativas, en un sistema complejo con diversas dimensiones de decisión político-administrativa. Sin embargo, un esquema de este tipo no permite enfoques distintos que permitan hacer un combate más eficiente a las prácticas corruptas, asumiéndolas como delitos, reduciendo la impunidad, y generando protección a los programas públicos que se instrumentan, con un enfoque de riesgos donde la corrupción es uno de ellos.¹

Lo que ocurre en la administración actual, donde pareciera que el presidente lucha de manera frontal con estructuras que le compiten espacios de decisión, es sólo el clímax de una condición que ha ocurrido desde hace varios años, donde podemos ver un proceso sistemático de desmantelamiento de reglas y prácticas democráticas. El uso de las organizaciones de procuración de justicia, la aplicación discrecional de la ley, el cambio de leyes para favorecer a actores en particular, etc., son síntomas de los últimos sexenios, incluyendo el actual. Si bien ahora es de una manera abierta, es importante mencionar que la simulación y la omisión, tienen un efecto tan pernicioso sobre dichas reglas y prácticas.

El problema, es que los actores políticos no parecen comprender la relevancia del régimen democrático, en conjunto con la estructuración de la república, como los factores más relevantes que dan solidez a las decisiones del gobierno, que al mismo tiempo permiten instrumentar soluciones públicas legítimas y eficientes. La confrontación y la división no es el problema porque son parte de la estructura política de una sociedad compleja, como la mexicana, pero sí es un problema cuando se busca acabar con los espacios de interacción democrática.

En ese sentido, el estilo populista del presidente López Obrador, parece imprimir un conjunto de elementos novedosos en el contexto del gobierno y los procesos de toma de decisiones, basados en consultas populares que no son legales. En política, como en otros espacios, los símbolos juegan un papel fundamental en la forma en que los actores construyen mecanismos de interacción con otros actores, para generar condiciones que sean favorables para la consecución de los intereses que se plantean como relevantes, en un contexto de disputa continua por el ejercicio del poder. En México, como en otros países, esos símbolos han estado implícitos como parte de los valores entendidos entre quienes compiten, pero también en el contexto social.

El discurso del ejecutivo, ha tenido esos elementos simbólicos como referentes de su administración, pero que sigue en el discurso de esa campaña electoral, generando una especie de gobierno simbólico, que debe transitar hacia un gobierno de hechos. Hay por lo menos tres aspectos simbólicos en ese discurso, que son recurrentes en el momento en que hay algún tropiezo mediático o algún tema que sea controvertido, tal como Trump

1 Norris and Nai 2017.

lo hace con el muro o la migración en los Estados Unidos. Dichos aspectos simbólicos como el nuevo aeropuerto y la consulta para hacerlo, la austeridad, Palacio Nacional vs. Los pinos, el avión presidencial, la prensa fífi, por mencionar los más relevantes, dominan las noticias asociadas a la transición, más que los temas que resultarían relevantes para cualquier inicio de administración, como el presupuesto, el sentido de la política económica, la política social, la seguridad, los proyectos de infraestructura, la política educativa, etc.

Lo relevante es que cuando alguno de esos temas relevantes se discute mediáticamente, no parece haber atrás un contenido sólido que permita profundizar en la discusión y, entonces, se regresa al planteamiento de los símbolos. El problema, es que una administración que usa símbolos, se convierte en un gobierno simbólico en algún momento del proceso.

Así como el muro de Trump, que parece irrealizable tal y como lo planteó, hay algunos símbolos en el caso de México que comienzan a ser improbables en su cumplimiento. Si bien varios de ellos se cumplirán, habrá otros que conviene que no se realicen, porque se mantienen espacios de discusión abiertos para poder culpar a otros actores de su bloqueo.

En el caso del Palacio Nacional como vivienda del presidente, implicó un cuestionamiento insistente sobre la razón por la que el presidente deba vivir en el edificio que es un museo, tal vez junto al castillo de Chapultepec, más vistoso de la Ciudad de México, como si fuera un noble, lo que contradice, incluso, la idea de austeridad y también la de ser un ciudadano común. En el caso del avión presidencial, su accidentada veta con la consecuente pérdida de recursos que eso implica, pero también es probable que, en el futuro, tenga que generarse un mecanismo que sustituya ese avión, o que genere seguridad, certeza y flexibilidad para los viajes del presidente.

El aeropuerto, se ha convertido en una pugna donde se traslada la responsabilidad de la decisión a "la gente", no a la ciudadanía, pero no se reconoce la realidad de que cualquiera de los dos proyectos, implicará una cuantiosa pérdida de recursos, por lo que, un mal manejo del tema, dejará una estela de cuestionamiento a la administración. Finalmente, el tema de austeridad ronda como un espacio infranqueable, por la resistencia de actores que no están dispuestos a perder recursos que son fundamentales para la actividad política. El gobierno requiere de símbolos para mantener espacios de legitimidad y de argumentación, pero no puede basarse en ellos como mecanismo cotidiano de discusión o de acción real.

Conclusión

El desmantelamiento de las instituciones del viejo sistema político, ha implicado un largo proceso de lucha política que ha permitido la construcción de otras instituciones, pero en espacios muy específicos de la política. Es por ello que durante los años recientes hay un sentimiento de estancamiento, lo cual es explicable por la forma en que el sistema de partidos mexicano se ha desarrollado.

Una vez que se ha avanzado en la institucionalización de procesos básicos para el funcionamiento de la democracia, ocurren procesos de desdemocratización, debido a que los liderazgos que han sido empoderados por esos mismos procesos, asumen la posibilidad de modificar las reglas para asegurar que la condición que le llevó al gobierno no desaparezca. Lo mismo ocurre cuando los grupos que han perdido poder se reorganizan, para tratar de hacer retroceder procesos que permiten el apoderamiento de otros grupos que pueden excluirlos de otros espacios de poder.

Estos riesgos de desdemocratización, en el contexto de un discurso de legitimidad democrática, pueden dañar la estructura institucional que es la base de una democracia real. El pliegue del tribunal electoral, la autocomplacencia del Instituto Nacional Electoral (INE), el alineamiento de los empresarios, el desprecio por la sociedad civil, etc., son señales de que ese riesgo es latente. Ante ello, la capacidad de organización e incidencia de la sociedad civil es fundamental, pues es el único actor, con la capacidad real, de plantear un contrapeso a las capacidades del poder político.

→ Referencias / References

- Algazi, Luisa Béjar. "¿Quién legisla en México? Descentralización y proceso legislativo" [Who legislates in Mexico? Decentralization and legislative process]. *Revista Mexicana de Sociología* 74, no. 4 (2012): 619-647. <https://doi.org/10.22201/iis.01882503p.2012.4.34446>. [In Spanish]
- Almond, Gabriel A. "Introduction. A Functional Approach to Comparative Politics." In *The Politics of the Developing Areas*, edited by Gabriel A. Almond and James S. Coleman, 3-64. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1960.
- Cuéllar Vázquez, Angélica. *Los jueces de la tradición* [The judges of tradition]. México: UNAM-SITESA, 2008. [In Spanish]
- Cuéllar Vázquez, Angélica. *La SCJN: sus ministros, la política y el agravio social* [The SCJN: its ministers, politics and social grievance]. Mexico City: FCPyS-UNAM, 2014. [In Spanish]
- Deutsch, Karl W. "Social Mobilization and Political Development." *American Political Science Review* 55, no. 3 (September 1961): 493-514. <https://doi.org/10.1017/S0003055400125134>.
- Duverger, Maurice. "A New Political System Model: Semi-Presidential Government." *European Journal of Political Research* 8, no. 2 (June 1980): 165-187. <https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.1980.tb00569.x>.
- Easton, David. *A Framework for Political Analysis*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1965.
- Easton, David. "A Re-Assessment of the Concept of Political Support." *British Journal of Political Science* 5, no. 4 (October 1975): 435-457. <https://doi.org/10.1017/S0007123400008309>.
- Hall, Peter A. "Historical Institutionalism in Rationalist and Sociological Perspective." In *Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency, and Power*, edited by James Mahoney and Kathleen Thelen, 204-224. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511806414.009>.
- Helmke, Gretchen, and Steven Levitsky, eds. *Informal Institutions and Democracy: Lessons from Latin America*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2006.
- Jones, Mark P. "Legislator Behavior and Executive-Legislative Relations in Latin America." *Latin American Research Review* 37, no. 3 (January 2002): 176-188.
- Katz, Richard S., and Peter Mair. "Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party." *Party Politics* 1, no. 1 (January 1995): 5-28. <https://doi.org/10.1177/1354068895001001001>.
- Kirchheimer, Otto. "The Catch-All Party." In *The West European Party System*, edited by Peter Mair, 50-60. Oxford: Oxford University Press, 1990.
- Linz, Juan J. "The Perils of Presidentialism." *Journal of Democracy* 1, no. 1 (Winter 1990): 51-69. <https://doi.org/10.1353/jod.1990.0011>.
- Lijphart, Arend. *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. New Haven, CT: Yale University Press, 1999.
- Norris, Pippa, and Alessandro Nai, eds. *Election Watchdogs: Transparency, Accountability and Integrity*. Oxford: Oxford Scholarship Online, 2017. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190677800.001.0001>.
- Panebianco, Angelo. *Political Parties: Organization and Power*. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
- Sartori, Giovanni. *The Theory of Democracy Revisited*. Chatham, NJ: Chatham House, 1987.
- Shively, W. Phillips. *Power and Choice: An Introduction to Political Science* (6th ed.). Boston: McGraw Hill Higher Education, 1998.

Sirvent Guitérrez, Carlos. "Las elecciones de 1997. El voto por la alternancia" [The elections of 1997. The vote for alternation]. *Estudios Políticos*, no. 16 (1997): 67-90. <https://doi.org/10.22201/fcpys.24484903e.1997.16.37170>. [In Spanish]

Tilly, Charles. *Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Villegas, Daniel Cosío, Ignacio Bernal, Alejandra Moreno Toscano et al. *Historia mínima de México* [The minimum history of Mexico]. México: El Colegio de México, 1973. <https://doi.org/10.2307/j.ctv3f8njr>. [In Spanish]

Woldenberg, José. *Historia mínima de la democracia en México* [The minimum history of democracy in Mexico]. México: El Colegio de México, 2012. [In Spanish]

The new Mexican political system: reconfiguration of capacities and power

Gustavo L. Montiel

→ Abstract

There exist different elements that contribute to the idea of the political system as such in the context of the Mexican experience, but also that serve as referents that characterize the recent past. For that reason, we present a scheme of analysis – with political trends that are being built and that differentiate the new Mexican political system compared to that of the 20th century. Based on a model of the political system as the methodology of the analysis, we will track the trends of the changing Mexican politics during the 21st century. The destruction of the institutions of the old political system is associated with a long process of political struggle, which has provided for the creation of new institutions, but in very specific political spaces. The article traces the changes in the political system of Mexico in the 21st century in its various spheres and manifestations: public authority, party system, electoral complex, civil society, the process of democratization. We consider the evolution of the three branches of government and analyze their current balance.

<https://doi.org/10.46272/2409-3416-2020-8-1-10-27>

Research article

Gustavo López Montiel,
Professor, School of Social
Sciences and Government,
Monterrey Institute of Technology
and Higher Education (Mexico)

E-mail: anlopez@tec.mx

For citation: Montiel, Gustavo
López. "El nuevo sistema político
mexicano: reconfiguración de
capacidades y poder" [The new
Mexican political system:
reconfiguration of capacities
and power]. *Cuadernos
Iberoamericanos* 8, no. 1 (2020):
10-27.
<https://doi.org/10.46272/2409-3416-2020-8-1-10-27>.
[In Spanish]

Received: 14.06.2020

Accepted: 10.07.2020

→ Keywords

Mexican political system, comparative politics, democracy, populism

Новая политическая система Мексики: реконфигурация возможностей и власти

Г.Л. Монтиель

→ Аннотация

Существуют различные элементы, которые не только способствуют формированию политической системы как таковой в контексте мексиканского опыта, но также выступают и в качестве референтных точек, характеризующих недавнее прошлое. По этой причине в статье представлена схема анализа с вычленением политических тенденций, которые конструируются на данном этапе и которые дифференцируют новую мексиканскую политическую систему по сравнению с системой XX века. Основываясь на модели политической системы как методологии анализа, автор рассматривает тенденции изменения мексиканской политики в XXI веке. Разрушение институтов старой политической системы связано с длительным процессом политической борьбы, который позволил создать новые институты, но в очень специфических политических пространствах. В статье прослеживаются изменения политической системы Мексики в XXI веке в различных ее сферах и проявлениях: публичная власть, партийная система, избирательный комплекс, гражданское общество, процесс демократизации. Рассмотрена эволюция трех ветвей власти и проанализировано их актуальное соотношение.

→ Ключевые слова

Политическая система Мексики, сравнительная политология, демократия, популизм

<https://doi.org/10.46272/2409-3416-2020-8-1-10-27>

Исследовательская статья

Монтиель Густаво Лопес, профессор Школы общественных наук и государственного управления Монтеррейского технологического института (Мексика)

E-mail: anlopez@tec.mx

Для цитирования: Montiel, Gustavo López. "El nuevo sistema político mexicano: reconfiguración de capacidades y poder" [The new Mexican political system: reconfiguration of capacities and power]. *Cuadernos Iberoamericanos* 8, no. 1 (2020): 10-27. <https://doi.org/10.46272/2409-3416-2020-8-1-10-27>. [In Spanish]

Статья поступила в редакцию: 14.06.2020

Принята к публикации: 10.07.2020